

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS EN CONTRATO DE SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE CON GRAVES TRASTORNOS DE CONDUCTA ASOCIADOS, EN CENTROS DE DÍA EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), al considerarse este contrato de servicios, se procede a justificar el recurso a la gestión indirecta para su prestación.

El recurso a la gestión indirecta presupone una decisión previa en este sentido por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, adoptada conforme a criterios de racionalidad.

Actualmente no hay suficientes plazas en la Red de Atención a personas con Discapacidad para la demanda de atención a personas discapacidad intelectual leve y capacidad intelectual límite con graves trastornos de conducta asociados, por lo que la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad no podría dar respuesta a las funciones que tiene encomendadas por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales mediante decreto 49/88 del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

El contrato administrativo para la *“gestión de un centro de día para personas con discapacidad intelectual, ligera o límite con graves trastornos de conducta asociados”*, se licitó en el año 2007 con un plazo de ejecución de dos años, prorrogables por periodos de la misma duración hasta un máximo de 20 años. En 2018, se procedió a licitar y adjudicar el contrato *“Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, ligera o límite con graves trastornos de conducta asociados y/o enfermedad mental, en Centro de Día de la zona Norte de la Comunidad de Madrid”* adaptando la modalidad del mismo a los nuevos requisitos de funcionamiento y calidad recogida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, adaptando la modalidad del mismo, a los nuevos requisitos de funcionamiento y calidad implementado por la nueva Ley de Contratos.

Con este nuevo contrato denominado *“Servicio de Atención Diurna a Personas con Discapacidad leve o capacidad intelectual límite con graves trastornos de conducta asociados, en Centro de Día en la zona Norte de la Comunidad de Madrid”* se pretende dar respuesta al mantenimiento de todas las plazas en Centro de Día, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y la mejora en las condiciones de calidad de la atención.

De acuerdo con lo expuesto en la memoria justificativa de la necesidad del contrato, así como en la propia descripción de las actuaciones e intervención a desarrollar en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las prestaciones propias del presente contrato se consideran de carácter especializado, no ordinario de la Administración, que deben ser prestadas por personal cualificado y con experiencia constatada para tal fin, garantizando la continuidad el

servicio, dando así cobertura a las necesidades de las personas con discapacidad leve o capacidad intelectual límite con graves trastornos de conducta asociados, al objeto de dar cumplimiento a las funciones que esta Dirección General tiene encomendadas.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no dispone de los medios propios necesarios, ya sean los medios materiales como las infraestructuras y edificios e instalaciones de los centros, ya sean medios personales de profesionales para llegar a ofrecer hasta un total de 26 plazas a lo largo de este nuevo contrato y así atender la demanda existente de este tipo de recurso. En particular, en lo que a los medios personales se refiere, el Pliego de Prescripciones Técnicas de este contrato establece unos medios personales, que ni por su número, ni por su variedad y especialización se puede considerar que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales está en condiciones de aportarlos:

- Un director responsable de la organización, funcionamiento y administración del centro con una jornada del 50%.
- 2 psicólogos a jornada completa y 1 psicólogo con una jornada del 20%.
- 1 trabajador social con 40% de jornada.
- 1 terapeuta ocupacional a jornada completa y 1 terapeuta ocupacional con una jornada del 30%.
- 4 técnicos integración social/educadores a jornada completa.

Además, entre las funciones atribuidas a esta Dirección General no se encuentra la gestión directa de los servicios de atención social, gestión directa atribuida a la Agencia Madrileña de Atención Social, por el Decreto 230/2015, de 20 de octubre.

De acuerdo con el artículo 1.1 del Decreto 230/2015, de 20 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia Madrileña de Atención Social, ésta ejerce la gestión directa, el desarrollo y el control de los centros y Servicios de Asistencia Social que, siendo de titularidad de la Comunidad de Madrid, le han sido asignados de conformidad con la normativa aplicable, así como de los que se le asignen en el futuro.

Si bien, este servicio podría haber sido asumido directamente por la Administración, a través de la Agencia Madrileña de Atención Social, sin tener que recurrir a la iniciativa privada en este campo, de atención a personas con discapacidad, se han dado las siguientes circunstancias para desistir de la gestión pública del centro:

- Por un lado, las restricciones a la contratación laboral de la Agencia Madrileña de Atención Social impuestas por las sucesivas leyes presupuestarias.
- La plantilla actual de la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad y Enfermedad Mental que, dentro de la Dirección General, ejerce la gestión de la red especializada de Atención a Personas con Discapacidad cuenta aproximadamente con 35 trabajadores (entre funcionarios y personal laboral), que tienen asignadas unas determinadas tareas y horarios, que impiden compaginarse con la prestación de este servicio.
- En esta Subdirección General, el personal de estructura es de Administración General y el especializado son abogados, educadores, psicólogos y trabajadores sociales, que se encargan de hacer el seguimiento de los recursos de gestión



indirecta, no existiendo en la Relación de Puestos de Trabajo ciertos perfiles que son claves en un centro de atención a personas con discapacidad.

- Por otro lado, limitaciones de corte económico, ya que el coste de un centro público normalmente es mayor y también la Administración tiene que enfrentarse directamente con la conflictividad laboral.
- Al mismo tiempo el Programa Presupuestario 231F “Atención a personas con discapacidad” tampoco dispone de los créditos necesarios para acometer el incremento de plantillas que la gestión de cada uno de los centros requeriría ni el de otros gastos que se deberían asumir, resultando imposible el incremento presupuestario que ello requeriría.

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta, por tanto, la normativa vigente y la necesidad de dar continuidad al número de plazas de la prestación de este servicio para personas con discapacidad leve o capacidad intelectual límite con graves trastornos de conducta asociados en centro de día y dado que la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad no puede prestar con sus propios medios este servicio, se hace necesario ofrecer una solución ágil y duradera, recurriendo a una contratación exterior para su ejecución por entidades que desarrollen su actividad en el ámbito del objeto de este contrato, dando así cumplimiento a las funciones que esta Dirección General tiene encomendadas.

En consecuencia, se procede a elaborar la siguiente propuesta del contrato del servicio de *“Servicio de Atención Diurna a Personas con Discapacidad leve o capacidad intelectual límite con graves trastornos de conducta asociados, en Centro de Día en la zona Norte de la Comunidad de Madrid”* conforme a lo establecido en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Dicho contrato tendrá una duración de dos años (24 meses) prorrogable como máximo de 12 meses adicionales en uno o varios periodos, estando previsto que los contratos inicien su ejecución 1 de septiembre de 2024.

En Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Firmado digitalmente por: SERRANO FERNÁNDEZ ALEJANDRA
Fecha: 2024.03.13 14:30